

Santiago, uno de julio de dos mil veinticinco.

**VISTO:**

En los autos ordinarios rol C-99-2023 tramitados ante el Juzgado de Letras de Tocopilla, sobre indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, caratulados “Gac Marín Luisa con Rendic Hermanos S.A”, por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés se acogió la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por doña Luisa Elvira Gac Marín en contra de sociedad Rendic Hermanos S.A., y, en consecuencia, se condenó a la demandada al pago de las siguientes prestaciones: a) \$14.630, a título de indemnización por daño emergente. b) \$9.210.000, a título de lucro cesante. c) \$5.000.000, a título de daño moral, más reajustes conforme a la variación del IPC y devengará intereses corrientes para operaciones no reajustables de ejecución inmediata, desde la época en que la presente sentencia cause ejecutoria y se rechazó, en todo lo restante, con costas.

El fallo de primer grado fue apelado por la demandada y una sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso de casación en la forma y confirmó la decisión.

En contra de esta última sentencia, la misma parte dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo.

Se ordeno traer los autos en relación.

Y teniendo en consideración:

**I. En cuanto al recurso de casación en la forma**

**Primero:** Que, el recurrente sostiene que la sentencia impugnada incurrió en la causal contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 170 del mismo cuerpo normativo.

Sostiene que en el fallo se omiten las consideraciones de hecho para establecer que la demandante sufre secuelas permanentes, graves y serias a causa del accidente y que perdió la capacidad de manejar un taxi, antecedente fáctico que sirvió a los jueces del grado para tener por acreditada la existencia del lucro cesante y del daño moral demandado, tal como se señaló en los considerandos sexto y séptimo.

Afirma que los únicos documentos acompañados para acreditar las lesiones y sus consecuencias son la constancia de una atención de urgencia del día 19 de marzo de 2022, un bono de atención del día 22 del mismo mes, un certificado suscrito por Javier Pizarro que señala que debe guardar reposo por 2 semanas y otro certificado de fecha 27 de abril de 2022 que señala que se encuentra imposibilitada de realizar actividad laboral por un período de 3 meses, “tiempo estimado para su recuperación”.



Indica que la sentencia impugnada incurre en este vicio porque omite completamente expresar los fundamentos por los cuales asigna valor a la prueba de testigos de oídas, entre ellos el cónyuge de la demandante, que resultan contradictorios con los documentos médicos acompañados que acreditan un monto de \$14.000 de gastos médicos y además, de acuerdo a la prueba documental, especialmente la demanda que presentó la misma demandante, en virtud de los mismos hechos, ante el 17° Juzgado Civil de Santiago se lee que en cuanto a sus lesiones afirmó en esa sede que se ha visto impedida de percibir ingresos desde el 19 de marzo de 2022, fecha en la que ocurre la caída relatada en estos autos, presentando un daño material por concepto de lucro cesante hasta el alta de su licencia médica el 4 de julio del 2022, que alcanza la suma de \$3.800.000, monto inferior al peticionado en esta causa.

**Segundo:** Que de la revisión de los antecedentes del proceso permite constatar que la demandada impugnó el fallo de primer grado mediante casación en la forma y apelación. Conociendo la Corte, rechazó el recurso de casación en la forma y confirmó la decisión de primer grado.

**Tercero:** Que al analizar el libelo de casación formal aparece que el recurrente impugna por esta vía únicamente el pronunciamiento que desestimó el recurso de casación en la forma deducido contra la sentencia de primer grado, es decir, su reproche se orienta a sustentar vicios que se contendrían en la sentencia de casación del tribunal de alzada, cuestionando los motivos en que se fundó la decisión de rechazo del arbitrio.

**Cuarto:** Que el artículo 63 N°1 letra a) del Código Orgánico de Tribunales dispone que las Cortes de Apelaciones conocerán en única instancia de los recursos de casación en la forma que se deduzcan en contra de las sentencias dictadas por los jueces de letras de su territorio jurisdiccional. La palabra “instancia”, en este caso, está tomada en el sentido de que el fallo que resuelve el correspondiente recurso de casación en la forma no es susceptible de ningún otro recurso ni puede ser revisado, de consiguiente, por ningún tribunal superior (Mario Casarino Viterbo, Manual de Derecho Procesal Orgánico, Quinta Edición Actualizada, Tomo I, página 161).

**Quinto:** Que, conforme lo razonado en los motivos precedentes, no configurándose el vicio alegado, el recurso de nulidad formal no podrá prosperar.

## **II. En cuanto al recurso de casación en el fondo**

**Sexto:** Que en el postulado de nulidad sustancial la recurrente denuncia infringidos los artículos 1698, 2314, 2329, 1556, 1700, 1702, 1706 y 1713 del Código Civil en relación con los artículos 342, 346 N° 1, 383, 384 y 399 del Código de Procedimiento Civil.



Sostiene, en síntesis que no se acreditó de acuerdo a los medios legales, que la demandante ejerciera una actividad lucrativa, pues ni siquiera demostró tener una licencia profesional que le habilitara a conducir un taxi, pues la sola propiedad de un vehículo de esas características no demuestra que ella lo condujera y no se probó además el monto de los ingresos, ni del porcentaje de utilidad, ni que se viera impedida de seguir realizándola, ni la existencia de un cambio en sus condiciones de vida que haya generado un perjuicio extrapatrimonial.

Afirma que la prueba considerada es la declaración de dos testigos de oídas, tanto para establecer que la demandante trabajaba de taxista, como que generaba un ingreso de \$40.000 diarios, como que no pudo seguir percibiéndolo a causa del hecho que imputa a nuestra representada, la que estima insuficiente y además fue refutada por la propia confesión espontánea de la actora, contenida en la demanda incoada el 15 de agosto de 2022 ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, en la causa Rol C-8424-2022, en que señaló que sufrió un daño por concepto de lucro cesante respecto al periodo que va desde la caída hasta el alta de su licencia médica el 4 de julio del 2022, monto que alcanza la suma de \$3.800.000, inferior a la que petitionó en estos autos.

Agrega que en el presente caso no se determinó cuáles son los ingresos, ni cuáles son los gastos necesarios para obtenerlos, por lo que se ha infringido el artículo 1556 del Código Civil y, en cualquier caso, debe anularse el fallo y debe ser rechazada la demanda de indemnización de perjuicios solicitada por este concepto, máxime si la misma actora había confesado que el perjuicio por este concepto había ascendido a \$3.800.000, por lo que los daños carecen de la certeza y seriedad necesarios para que se accediera a ellos, y lo mismo ocurre respecto del daño emergente, pues no se rindió una prueba que demuestre los perjuicios patrimoniales y morales, lo que infringe el artículo 1698 del Código Civil, al relevar a la actora de su acreditación, así como también a los artículos 2314 y 2329 del mismo cuerpo normativo, pues se impone a su representada la obligación de indemnizar daños que no se ha demostrado haya ocasionado a la demandante.

Precisa que, además se vulneran los artículos 1702 y 1703 del Código Civil y 346 del Código de Procedimiento Civil, ya que se tienen por reconocidos expresamente los instrumentos privados, a pesar de no haberlo sido en el juicio y, consiguientemente, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, ya que dichos documentos, que emanan de diversas entidades públicas que prestan servicios en el área de salud y de médicos que en ellas laboran, dan cuenta de diversas prestaciones, atenciones y diagnósticos, que están correlacionados con los demás antecedentes de autos y que tienen la virtud de originar presunciones judiciales que por sus características y consistencia interna y



externa, reúnen las exigencias de gravedad, precisión y concordancia previstas en el artículo 1712 del Código Civil para darle valor de plena prueba respecto del hecho al que se refieren, en este caso la naturaleza y extensión de los padecimientos médicos experimentados por la actora.

Señala que se infringen los artículos 383 y 384 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el juez da valor de plena prueba a la declaración del cónyuge de la demandante, que podría considerarse presencial y a dos personas que se identificaron como taxistas, que son de oídas según explicaron y así quedó consignado en la sentencia de primer grado.

Indica que también se vulneran los artículos 398 del Código de Procedimiento Civil y 1713 del Código Civil, en cuanto no se da el valor que establece la ley a la confesión espontánea de la demandante acerca de la existencia y cuantía de los daños demandados, ya que afirmó que el alta médica se produce en julio de 2022, lo que descarta la procedencia del lucro cesante y el daño moral de la manera que fueron concedidos en la sentencia, porque no existe un impedimento permanente para trabajar, que es lo que se consideró para concederle ambos rubros indemnizatorios.

**Séptimo:** Que para la debida inteligencia de las cuestiones planteadas en el recurso interpuesto, se debe recordar:

1.- Comparece doña Luisa Elvira Gac Marín quien deduce demanda de indemnización de perjuicios extracontractuales en contra de la empresa Rendic Hermanos S.A.

Funda su acción señalando que con fecha 19 de Marzo del año 2022, acudió a las dependencias del Supermercado Unimarc, y en el interior, en la sección de carnicería realizó el pedido correspondiente en el mostrador y, al retirarse tropezó con una estructura de pallet, vacía, sin señalética y la cual no estaba dentro de su campo de visión, cayendo al piso, producto de lo cual sufrió golpes en el pecho, costilla y en el muslo, rodilla y tobillo de su pierna derecha, debido a un actuar negligente, desprolijo y descuidado por parte de la demandada, que dejó abandonado en medio del espacio destinado a tránsito de los clientes que frecuentaban el supermercado, fue trasladada a Urgencias del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla para constatar su estado de salud en el Servicio de Urgencias, el examen físico arrojó resultados graves, pues se lastimó el tobillo izquierdo, rodilla derecha, el muslo derecho, muñeca izquierda, acompañados de fuertes dolores en las costillas, y le recetaron medicamentos como Diclofenaco, Betametasona y Paracetamol y, orden de reposo por dos semanas.

Sostiene que padece neuritis intercostal izquierda tras fractura costal, ordenándose por parte del traumatólogo reposo por el periodo de 3 meses, la lesión



en la costilla se transformó en una lesión de carácter crónico, que ha generado un impedimento absoluto para desarrollar su actividad de chofer de locomoción colectiva por el resto de su vida, lo cual ha generado un daño irreparable tanto físico como psicológico.

En base a lo expuesto, solicita indemnización por daño emergente, consistente en la suma de \$14.630.- por concepto de bono de atención en FONASA; lucro cesante por la imposibilidad de ejercer su trabajo como chofer de locomoción colectiva desde la época del accidente a la fecha de interposición de la demanda, por la suma de \$15.615.000, monto que se ha calculado tomando en consideración que diariamente percibía sumas que en promedio ascendían a \$45.000.- lo que mensualmente, corresponde a \$1.395.000; luego, dicha cifra se ha multiplicado por un total de once meses que ha permanecido sin poder ejercer su actividad laboral y por daño moral, fundado en que se ha visto imposibilitada total y permanente de poder ejercer la labor remunerada de chofer de locomoción colectiva no obstante que su edad se empina por sobre los 70 años, motivos por los cuales avalúa su daño moral en la suma de \$15.000.000.

2.- Comparece don Rodrigo Donoso Barahona, en representación de la demandada y contesta la demanda solicitando sea rechazada en todas sus partes, con costas. Expone que para que pueda prosperar la acción de responsabilidad extracontractual deducida, es de cargo de la actora acreditar sus presupuestos, los que en su concepto no concurren. Hace presente que, atendida la actividad de su representada, es normal, previsible, cotidiano y propio del rubro que en un lugar en el que se venden la cantidad de bienes que se ofrecen en un supermercado, puedan existir pallets acarreando mercadería y, no por ello existe negligencia o falta de cuidado de su representada, siendo carga de la actora el acreditar que el pallet no debió estar ahí o estaba mal instalado o en un estado tal que causaba un riesgo para los clientes.

En segundo lugar, en cuanto a la evaluación del daño, estima que no existe congruencia entre el daño avaluado en la demanda incoada el 18 de agosto de 2022 ante el 17° Juzgado Civil de Santiago causa Rol C-8424-2022 y el demandado en autos, pues en cuestión de meses el supuesto daño provocado se incrementó desde la suma de \$3.750.000 a \$30.629.630; sin perjuicio que la demandante debe acreditar la ocurrencia de cada uno de los daños que alega. En tercer lugar, desconoce que exista una relación de causalidad entre el hecho ilícito -imputable al agente- y el daño sufrido, pues afirma que la existencia de un pallet en el sector de carnicería del Supermercado no es por sí mismo un hecho ilícito generador de responsabilidad extracontractual, por lo que no puede existir causalidad sin la existencia del hecho ilícito.



3.- El tribunal de primera instancia acogió parcialmente la demanda, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

**Octavo:** Que para hacerse cargo de las infracciones que denuncia la recurrente, es pertinente considerar los hechos asentados en la sentencia:

1.- Que con fecha 19 de marzo de 2022, alrededor de las 10:00 horas y al interior del Supermercado Unimarc, ubicado en calle 21 de Mayo N°1704 de esta ciudad, en el sector de carnicería y, al retirarse desde el mostrador de dicho lugar, tropezó con un pallet vacío, sin que existiera en el lugar señalética o advertencia de aquello, producto de lo cual cayó al piso, y sufrió golpes en el pecho, costilla y en el muslo, rodilla y tobillo de su pierna derecha. Luego de la caída, se apersonó en el lugar el administrador don Wilson Veliz Leyton, quien levantó y suscribió un acta simple de lo sucedido.

2.- Producto de la caída, la actora sufrió lesiones en el tobillo izquierdo, rodilla derecha, cara anterior tercio superior muslo derecho, muñeca izquierda.

Posteriormente, el diagnóstico fue precisado a neuritis intercostal izquierda tras fractura costal, debiendo guardar reposo por tres meses a contar del 27 de abril de 2022, en tratamiento médico rehabilitador, encontrándose imposibilitada de realizar actividad laboral por tres meses.

3.- La demandante producto de la caída, sufrió lesiones que se han constituido en un impedimento para continuar desarrollando el oficio de chofer de locomoción colectiva en un vehículo de su propiedad y, que se vio en la necesidad de contratar un chofer.

4.- Que la actora es propietaria del taxi que conducía en la Línea N°5, y es socia activa del sindicato de colectivos N°5 de Tocopilla, y conduce un vehículo de su propiedad Placa patente LZSH-33.

**Noveno:** Que sobre la base de los antedichos presupuestos fácticos la sentencia recurrida confirmó el fallo de primera instancia, acogiendo parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios, reflexionando que la demandada, por intermedio de sus dependientes, debió retirar el pallet vacío inmediatamente de efectuada la reposición de las mercaderías, en consideración a que dicho procedimiento se realizó en circunstancias que el supermercado mantenía atención de público y habían clientes circulando en su interior, de modo que debía extremar sus medidas de seguridad y/o en subsidio, alertar a sus clientes sobre la existencia de dicho pallet, lo que no sucedió en la especie, quedando establecida la culpa que tiene la demandada en los hechos ya referidos, y que el daño se produjo como consecuencia del accionar negligente y descuidado de aquélla, a causa de lo cual se produjeron los hechos siendo responsable de los daños causados a la demandante, toda vez que la correlativa obligación que nace del referido derecho de la actora en



su calidad de consumidora, está constituida por la observancia y efectivo respeto que debe procurar la demandada, quedando, de este modo, en evidencia la relación de causalidad existente entre el hecho culposo provocado por la negligencia del demandado y los daños ocasionados.

En seguida razonó que así constituido el delito civil por la vulneración de la demandada al derecho de la actora, en su calidad de consumidora, establecido en la letra d) del artículo 3º de la Ley N° 19.496, en cuanto el supermercado no cuidó la seguridad en el piso de la sección de carnicería según se dijo en el motivo undécimo, lo que atentó en contra de la demandante; quedando establecida la responsabilidad civil de la demandada, toda vez que en su calidad de proveedor conforme a la referida Ley, se encontraba obligada a mantener la seguridad de sus consumidores, y en la especie, ha quedado demostrada su negligencia al mantener un pallet vacío y sin señal de advertencia el piso de la sección de carnicería y/o rotisería, en circunstancias que por el espacio físico del lugar y la especial disposición de vitrinas que en la especie, formaban una especie de pasillo por el cual circulaban los clientes hacia la vitrina de carnicería y viceversa, debió ser retirado inmediatamente o alertada su presencia.

En cuanto al daño emergente establecen que la actora acreditó que con motivo u ocasión al accidente y las atenciones médicas requeridas, sufrió una pérdida patrimonial por la cantidad de \$14.630; respecto al lucro cesante, concluyen que acreditado que la demandante producto de la caída, sufrió lesiones que se han constituido en un impedimento para continuar desarrollando el oficio de chofer de locomoción colectiva en un vehículo de su propiedad y, que se vio en la necesidad de contratar un chofer, sufriendo pérdidas diarias valuadas en la suma de \$45.000.- y, que dichos montos son los percibidos diariamente en promedio y que la actora trabajaba seis días a la semana, y en algunas ocasiones siete días; sin embargo, atendida la imprecisión de los testigos en cuanto al trabajo dominical y lo improbable que resulta el hecho que una persona de 70 años trabaje los siete días de la semana, en razón de su edad y el hecho de encontrarse jubilada, se considerará para los efectos de cálculo seis días a la semana.

Agregan los jueces del grado que, los testigos también se encuentran contestes en que la actora contrató un chofer para que trabajase su vehículo, quien por dicho concepto paga al propietario del mismo, la suma de \$16.000, concluyendo que la pérdida de ingresos diarios que habrá de determinarse, alcanza la suma de \$30.000; al mes la suma de \$810.000.-, considerando para dichos efectos la deducción de días domingo, por lo que atendido que el accidente aconteció el 19 de marzo del año 2022 y, el lucro cesante se solicita hasta 03 de marzo de 2023, esto



es, a razón de 11 meses y 12 días, se determina el lucro cesante por la suma de \$9.210.000.

Por último, en cuanto al daño moral, establecen que se acreditó por la demandante que, como consecuencia de la conducta ilícita sufrió dolor físico de larga duración, con secuelas físicas y funcionales permanentes, como son la imposibilidad de desempeñar su oficio de conductora de taxi colectivo y, la consecuente pérdida de la capacidad de ganancia y que la actora sufrió una fractura en su costilla producto de la caída y, que el accidente restó movilidad e independencia a la actora, siendo del todo razonable que para una persona de 70 años de edad, acostumbrada a realizar un oficio del cual gustaba y, que ya no puede ejercer, se haya visto afectada psicológicamente, concluyendo que acreditada existencia de daño físico y psíquico con manifestación de secuelas permanentes conocidas, en atención a su edad de 70 años y condiciones físicas y, considerando especialmente la imposibilidad de ejercer las labores habituales a lo que estaba acostumbrada, todo lo cual tiene directa relación y consonancia a su bienestar general, ya que trabaja con su físico, y previa revisión del baremo de casos similares, este magistrado estima valorar en forma prudencial la satisfacción de compensación por daño moral con el pago de \$5.000.000.-

La Corte agregó que resulta irrelevante que las personas que suscribieron los diversos antecedentes médicos de la demandante no concurrieran a declarar como testigos y ratificaran dichos documentos, en la medida que no se trata de instrumentos privados que emanen de la parte contra la cual se presentan en el juicio y, consiguientemente, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Dichos documentos, que emanan de diversas entidades públicas que prestan servicios en el área de salud y de médicos que en ellas laboran, dan cuenta de diversas prestaciones, atenciones y diagnósticos, que están correlacionados con los demás antecedentes de autos y que tienen la virtud de originar presunciones judiciales que por sus características y consistencia interna y externa, reúnen las exigencias de gravedad, precisión y concordancia previstas en el artículo 1712 del Código Civil para darle valor de plena prueba respecto del hecho al que se refieren, en este caso la naturaleza y extensión de los padecimientos médicos experimentados por la actora.

En cuanto a los reparos que la demandada realiza a la valoración de la prueba testimonial, más allá de indicar, en términos genéricos, que los testigos no reunirían las exigencias del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, no se hace cargo de los argumentos del tribunal para entender que reúnen las exigencias de esta disposición para darle el valor de plena prueba, por lo que ese análisis permanece incólume y a él debe estarse. Por último, también debe estarse al





análisis del tribunal para desestimar que la pretensión indemnizatoria realizada por la parte demandante en otro juicio civil en la ciudad de Santiago pueda constituir confesión de los padecimientos físicos experimentados por ella. Se trata de una demanda presentada con antelación a la actual, sujeta a la realidad física de la actora a la época de su presentación y, además, al análisis que efectuaron sus abogados al momento de definir su estrategia procesal.

**Décimo:** Que los errores de derecho que la recurrente asegura que cometieron los sentenciadores, que, según su parecer, tienen su origen y derivan tanto de la inobservancia de las normas reguladoras de las probanzas aportadas al juicio, como de la infracción de preceptos de carácter sustantivo, todos los cuales han sido erróneamente interpretados y aplicados al caso de autos, con influencia sustancial en lo resuelto, llevaron a los jueces del mérito a acoger la acción, no obstante no encontrarse acreditada la existencia, naturaleza y monto del daño emergente, lucro cesante y daño moral, lo que debió llevar a los jueces del grado a rechazar la demanda de indemnización de los perjuicios.

**Undécimo:** Que, respecto al primer asunto, la crítica de ilegalidad se circunscribe a la esfera probatoria de la contienda, lo que hace necesario recordar que el recurso de casación es un medio de impugnación de índole extraordinaria que no constituye instancia jurisdiccional pues no tiene por finalidad revisar las cuestiones de hecho del pleito. Esta limitación se encuentra legalmente contemplada en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto dispone que la Corte Suprema al invalidar una sentencia por casación en el fondo dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia que zanje el asunto que haya sido objeto del recurso de la manera que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos, tal como se han dado establecidos en el fallo recurrido. Así entonces, sólo en forma excepcional es posible alterar la situación fáctica establecida por los tribunales de instancia, en el caso que la infracción de ley responda a la transgresión de alguna norma reguladora de la prueba lo que, en la especie, no ocurre.

**Duodécimo:** Que al respecto, cabe recordar que las leyes reguladoras de la prueba se entienden vulneradas, fundamentalmente, cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley le asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley le diere.

Se ha dicho que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. Luego, los jueces del fondo son soberanos para apreciar las pruebas, dentro del marco establecido por las normas pertinentes. Por ello, no son



susceptibles de ser revisadas por la vía de la casación las decisiones de los sentenciadores basadas en disposiciones que entregan libremente la justipreciación de los diversos elementos probatorios;

**Décimo tercero:** Que no existe contravención del artículo 1698 del Código Civil, ya que esta regla se infringe cuando la sentencia obliga a una de las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a su contraparte, esto es, si se altera el *onus probandi*, lo que a la luz de los antecedentes se observa no ha ocurrido. En el caso sub lite correspondía a la actora acreditar los requisitos de la acción de responsabilidad extracontractual, esto es, la existencia de un delito o cuasidelito civil, la culpabilidad del demandado en su comisión, la existencia de daño o perjuicios en la víctima y la relación de causalidad entre la acción culposa y los daños que se reclaman y los jueces del fondo estimaron que conforme a la prueba testimonial y de presunciones aportada ello aconteció, constituyendo las alegaciones de la recurrente una disconformidad con la valoración efectuada, pero que no dan cuenta de una vulneración que autorice la revisión del fallo.

**Décimo cuarto:** Que deberá ser desestimado el yerro jurídico a los artículos 342 y 346 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, disposiciones que contienen las normas reguladoras de la prueba instrumental, porque los jueces del fondo no negaron o desconocieron el carácter de instrumentos privados a los documentos de tal carácter allegados al proceso, sino que fueron ponderados a la luz de las normas regulatorias de las presunciones judiciales las que el recurso no denunció como vulneradas.

**Décimo quinto:** Que misma suerte corre la alegada infracción del artículo 384 N° 1 y 2 del Código de Enjuiciamiento, pues esta disposición forma parte de un marco normativo desde el cual los jueces de mérito pueden hacer uso de una facultad privativa de comparación de la prueba rendida, correspondiendo tal actuación a un proceso racional del tribunal, no sujeto al control del recurso de casación en el fondo.

Es menester consignar que este Tribunal de Casación ha sostenido de manera invariable que dicha disposición no reviste la naturaleza de reguladora de la prueba, afirmación que deriva de una interpretación que emana de la historia fidedigna del establecimiento del precepto, conforme lo consignado en la segunda parte del artículo 19 del Código Civil. La apreciación de la prueba testimonial, entendida como el análisis que efectúan de ella los sentenciadores de la instancia para establecer cada uno de los elementos que consagra el legislador para regular su fuerza probatoria, queda entregada a dichos magistrados y no puede ser revisada por la vía de este recurso de casación.



**Décimo sexto:** Que respecto a la vulneración a las normas referentes a la prueba de confesión judicial, resulta suficiente para desestimar este capítulo del recurso, la circunstancia que el libelo señala que se trata de la confesión extrajudicial prestada por la actora, por lo que conforme al artículo 398 es sólo base de presunción judicial, y el recurso omite denunciar como infringidas las normas regulatorias de la prueba de las presunciones.

**Décimo séptimo:** Que constatada la inexistencia de infracción de leyes reguladoras de la prueba y habida cuenta de lo anotado en el motivo undécimo, resulta pertinente recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y que efectuada correctamente dicha labor, al determinar éstos con sujeción al mérito de los antecedentes, probanzas aportadas por las partes, la interpretación y aplicación de las normas atinentes al caso en estudio, ellos resultan inamovibles para este tribunal, conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, no siendo posible su revisión por la vía de la nulidad que se intenta.

**Décimo octavo:** Que, por las razones referidas en los motivos precedentes, el recurso de casación en el fondo formulado en autos debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 764, 765, 766 y 767 del Código de Procedimiento Civil, **se rechazan** los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por los abogados Rodrigo Donoso Baraona y José María Olea Aramburu, en representación del demandado en contra de la sentencia de doce de marzo de dos mil veinticuatro dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Prado

**Rol N° 13512-2024.-**

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Arturo Prado P., señor Mauricio Silva C., señor Mario Carroza E., señora María Soledad Melo L. y el Abogado integrante señor Álvaro Vidal O. No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma la Ministra señora Melo por encontrarse con feriado legal. Santiago, uno de julio de dos mil veinticinco.





En Santiago, a uno de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

